

Declaración del Partido Vanguardia Popular

El próximo domingo 28 de marzo se reunirán el Consejo y la Asamblea Nacionales del partido Vanguardia Popular. En esa reunión se tomarán los acuerdos fundamentales sobre la táctica electoral. El Comité Ejecutivo ha sometido a la consideración de esos organismos el proyecto de «declaración» que publicamos a continuación. Es un borrador. Es un documento para estudio. Hemos considerado que es importante que todos los compañeros del partido y sus amigos y simpatizantes tengan conocimiento de esos documentos. Es parte de la transparencia que creemos deben tener todas las actividades partidarias.

La redacción.

En tres sesiones que en conjunto han realizado el Consejo y la Asamblea Nacionales han sido examinados los problemas fundamentales de la táctica electoral y se ha llegado a las siguientes conclusiones:

PARTICIPAREMOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

1.- Se ha hecho un examen sobre los problemas y limitaciones a que están sometidos los partidos que no disfrutaban del privilegio de la deuda política, ni del favor de los medios de comunicación.

La cuestión de la contribución del Estado a las campañas políticas tiene que ser regulado en base a principios democráticos, algunos de los cuales están expresados en la sentencia de la Sala Constitucional que se pronunció sobre estos asuntos.

El objetivo principal del sistema de «deuda política adelantada» y la distribución por los votos obtenidos en una elección anterior, es decir, en razón de un hecho pasado, ha sido la reproducción del dominio bipartidista. Este sistema fue establecido y este es sólo un ejemplo para mostrar su carácter injusto cuando el PVP tenía 25 años de estar ilegalizado y, consecuentemente, privado del derecho de participar en las elecciones.

Por eso creemos que se debe establecer un sistema basado en los siguientes principios: a) el Estado debe financiar la actividad electoral, sin que sea necesario entregar dinero a los partidos; b) debe entenderse que la actividad electoral son todos aquellos pasos necesarios para poner a los ciudadanos en condiciones de ser elector y de ejercer este derecho libremente; la actividad de los partidos para explicarles sus programas, sus propósitos políticos inmediatos, para oponerse a los planteamientos de otros, así como dar a conocer las condiciones personales de los candidatos.

Consideramos que el Estado no puede ni debe financiar la publicidad superflua, que lejos de estimular, amella el espíritu crítico de los ciudadanos.

El carnaval electorero, los insultos y las injurias como arma política deben ser eliminadas.

Los gastos de los partidos deben correr por cuenta de sus adherentes. Para ello deberán establecerse las siguientes reglas:

a) Podrán contribuir con los partidos políticos sólo los ciudadanos costarricenses, es decir que se trata de un derecho exclusivo de las personas físicas. b) Las contribuciones debe estar limitadas por su monto, en plazos anuales. c) la violación de las leyes en esta materia deberán constituir delito.

La aplicación de estos principios también contribuiría a hacer más serios los procesos electorales y a sacar de ellos las influencias de delincuentes y narcotraficantes.

Está en discusión un proyecto de ley para regular la contribución del Estado a las campañas electorales. Consideramos que el sistema aplicado hasta ahora no debe reproducirse.

Existe el peligro de que se repita con cambios puramente cosméticos. Este modelo lleva implícito al fraude electoral y es el fundamento de la corrupción política.

La financiación estatal de las campañas tal como se hace ahora es una evidente manipulación del sistema democrático y su mediatización en favor de los partidos de las clases dominantes.

La discusión que actualmente se realiza en la Asamblea Legislativa tiene una importancia muy grande para los destinos de la democracia. Se va a decidir si se coloca a todas las organizaciones políticas en pie de igualdad para ganar los votos de los costarricenses, o se le entregan privilegios indebidos al PLN y al PUSC. Desgraciadamente todo parece indicar que triunfará la tesis de los privilegios. Lo más importante es que son cada vez más los costarricenses que repudian la mediatización de la democracia que produce el favoritismo estatal en favor de estos partidos.

A pesar de los problemas que crea la discriminación hemos decidido participar activamente en el proceso electoral. Esperamos poder unir nuestros esfuerzos con todos los que luchan por la democratización del sistema electoral.

Participaremos para enfrentar la crisis política y moral que abate a la sociedad costarricense, y para la búsqueda, con la participación de todas las organizaciones populares, de un nuevo modelo de desarrollo económico.

POR UN NUEVO SISTEMA POLITICO

2.- Es necesario luchar por una nueva democracia, por nuevos conceptos de justicia social. La demagogia oficial y los medios de comunicación ocultan celosamente las deficiencias y carencias del sistema político.

La democracia mediatizada debe dar lugar a una verdadera participación del pueblo en la conducción de los asuntos públicos. Los sistemas de representación popular tienen que ser perfeccionados. No sólo debe cambiar el sistema de elección de los diputados, sino que debe darse a los electores el derecho a removerlos. Deben eliminarse todos los privilegios para la alta burocracia.

No podemos ignorar que en nuestro país se han alcanzado elevadas metas de respeto a los derechos individuales y que se ha establecido un sistema electoral muy eficiente, aunque en fin de cuentas sirve al propósito de mediatizar los derechos democráticos de los ciudadanos. Pero es necesario avanzar mucho más. Evidentemente la creación de la jurisdicción constitucional y el nombramiento del defensor de los habitantes son pasos de avance. Sin embargo, las garantías sociales no se hacen efectivas. Muchos derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho a la concertación de convenciones colectivas le son negados a los trabajadores.

No debemos permitir que se lance al olvido que durante 27 años nuestro partido y todas las organizaciones populares fueron

perseguidas y marginadas de los procesos electorales. Durante esos años los medios de comunicación no publicaban nada que emanara de esas organizaciones, ni siquiera en campos pagados, se decomisaban libros científicos, la policía política y el OIJ perseguían ferozmente a los militantes de la izquierda y de las organizaciones populares. Esto ocurría muy recientemente.

Ahora se trata de conservar todo lo positivo de nuestro sistema político y de continuar el esfuerzo por su transformación en beneficio del pueblo.

Los cambios políticos solo podrán alcanzarse a través de la acción mancomunada de todo el pueblo, en una alianza pluralista, democrática y profundamente nacional.

La «democracia» mediatizada, está en crisis que abarca todo el sistema de organización política. Es la crisis del dominio de la minoría oligárquica, que se separa de los intereses nacionales y populares e impone modelos y concepciones generadas por gobiernos extranjeros y organismos financieros internacionales. Esta minoría pretende apoderarse de toda la riqueza nacional y monopolizar el poder político. No admiten ningún cambio en beneficio de las mayorías.

No estamos, pues, ante un problema técnico, sobre la reestructuración y el tamaño del Estado. Por eso fracasó COREC y las múltiples comisiones nombradas para estudiar los problemas del Estado. Y es también por la misma razón que no hay ningún plan sistemático y coherente de reforma del Estado. Estamos ante un problema político global, en el cual el primer asunto a resolver es la cuestión de a qué intereses sirve el Estado. El contenido principal de un Estado renovado debe ser el servicio a los intereses nacionales con sentido patriótico y al pueblo conforme a los principios más avanzados de la justicia social.

Las cúpulas dominantes en el PUSC y en el PLN, y sus figuras más representativas, Miguel Angel Rodríguez y José María Figueres, son los portadores de las ideas neoliberales y del capitalismo salvaje. Representan el pasado. No obstante siguen dominando el panorama electoral. Esto es precisamente lo que hay que cambiar, en base a nuevas opciones progresistas y democráticas. Este no es un problema interno de estos partidos, es de todo el pueblo. El bipartidismo reaccionario, caduco y corrupto, tiene que desaparecer en beneficio de un sistema político nuevo.

POR UNA VIDA MAS JUSTA, MAS LIMPIA, MAS DEMOCRATICA

3. Existe una profunda crisis moral en toda la sociedad costarricense. Es cierto que se han perdido valores y que esta pérdida se deja sentir en todos los aspectos de la vida nacional.

Los mayores responsables han sido los partidos políticos, la alta burocracia y los medios de comunicación.

Se nos ha impuesto un sistema de pensamiento neoliberal que es todo lo contrario a la